EXPEDIENTE No.: CEDH/III/048/2011
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
No. 14/2012
AUTORIDAD
DESTINATARIA: PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE
SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de junio de 2012

LICENCIADO MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 3º; 4º Bis; 4º Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1o.; 3o.; 7o. fracciones I; II y III; 16, fracción IX; 27, fracción VII; 55; 57; 58 y 64 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como 94; 95; 96; 97 y 100 de su Reglamento Interior, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número CEDH/III/048/2011, relacionados con la queja interpuesta por el señor N1 por presuntas transgresiones a sus derechos humanos, por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado, y visto los siguientes:

I. HECHOS

Que la presente investigación dio inicio con motivo de la queja interpuesta por el señor N1 en fecha 14 de febrero de 2011, mediante la cual hizo del conocimiento hechos que consideró transgredieron sus derechos humanos, toda vez que elementos de la Policía Ministerial del Estado, sin que existiese mandamiento alguno, lo detuvieron y a su vez lo llevaron en calidad de presentado ante el agente del Ministerio Público del fuero común para que rindiera su declaración ministerial como responsable de un robo bancario.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Diligencia de fe de hechos de fecha 14 de febrero de 2011, donde se hace constar que personal de esta Comisión se constituyó en las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad, donde entrevistó al señor N1, a quien recepcionó queja y se le tomaron fotografías de su superficie corporal.

2. Escrito de queja de fecha 14 de febrero de 2011, presentado por el señor N1 ante personal de este organismo en contra de elementos de Policía Ministerial del Estado, quienes el día 3 de febrero de 2011 lo detuvieron a la altura de los juzgados penales ubicados en el CECJUDE Culiacán.

El hoy quejoso expresó en dicho escrito, haber sido interceptado por una persona que vestía de civil, quien lo volteó y esposó con las manos hacia atrás, subiéndolo a una camioneta a golpes, bajo la amenaza de que lo iban a matar, torturándolo para que se declarara culpable de unos asaltos bancarios, mismos que reconoció haber llevado a cabo, según dijo, debido al temor de que le hicieran daño a él y a su familia.

3. Mediante oficio número CEDH/VG/CUL/000365 fechado el 16 de febrero de 2011, se solicitó al Encargado de la Dirección de Policía Ministerial del Estado rindiera un informe detallado sobre los actos referidos en la queja.

4. En atención a lo expuesto, mediante oficio número 001701 de fecha 21 del mismo mes y año, el Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del Estado informó haber encontrado registro de que agentes de esa Corporación, el día 4 de febrero del citado año realizaron la detención del señor N1.

Detención que según su informe se llevó a cabo a las 03:10 horas del día 4 de febrero por calle **** y avenida **** de esta ciudad, en cumplimiento a una orden de detención emitida por el Agente Séptimo del Ministerio Público del Fuero Común de esta ciudad, mediante oficio CLN/VII/3/2011, derivado del expediente ****, y que dicha orden fue cumplimentada por N2 y N3, encargado e integrante del Grupo ****, adscritos a la Coordinación de Investigación de Delitos de la citada policía.

A dicho informe adjuntó lo siguiente:

- a) Oficio número CLN/VII/3/2011 de fecha 4 de febrero de 2011, consistente en orden de detención girada por el Agente Séptimo titular del Ministerio Público del fuero común, dirigida al Director de Policía Ministerial del Estado, solicitando la localización y detención del señor N1 por ser probable responsable de la comisión del delito de robo bancario.

- b) Oficio con folio número 001119 de fecha 4 de febrero de 2011, a través del cual puso a disposición del Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común, en calidad de detenido, al inculpado N1.
- c) Dictamen médico de lesiones de fecha 4 de febrero de 2011, que determina las lesiones que presentó N1.

5. Oficio número CEDH/V/CUL/000629 de fecha 15 de marzo de 2011, por el cual esta CEDH solicitó al Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común rindiera un informe detallado con relación a los hechos que señala el quejoso.

6. Oficio número CEDH/V/CUL/000630 de fecha 15 de marzo de 2011, por el cual se solicitó al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito informara si en fecha 3 de febrero de 2011 ingresó a dicho centro la persona de nombre N1, como visitante.

7. Mediante oficio número 192/2011 fechado el 18 de marzo de 2011, el Director del CECJUDE informó a esta Comisión, que no se encontró antecedente de ingreso como visitante a dicho centro de reclusión el día 3 de febrero de 2011 del C. N1.

8. Oficio número CEDH/V/CUL/000910 fechado el 29 de abril de 2011, por el que este Organismo Estatal requirió al Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común remitiera el informe solicitado, ya que a la fecha no se había recibido respuesta alguna.

9. A través de oficio número 0038 de fecha 17 de mayo de 2011, la Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común dio respuesta a lo solicitado, manifestando que con fecha 18 de enero de 2011, el entonces Agente Titular del Ministerio Público del fuero común, recibió llamada telefónica de parte de C-4 Radio Operador de Policía Ministerial del Estado, a través de la cual se le informó de un robo bancario, lo que generó el inicio de la averiguación previa número ****, en contra de quien o quienes resultaran responsables.

También comunicó en su informe, que en fecha 3 de febrero de 2011, compareció previo requerimiento el señor N1, quien rindió su declaración ministerial con relación a los hechos que se le imputaban en la referida averiguación previa, siendo en esa misma fecha cuando se acordó su detención, ordenándose al Director de Policía Ministerial del Estado el cumplimiento correspondiente.

Por último manifestó que mediante oficio número 001119 de fecha 4 de febrero de 2011, el Coordinador de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del

Estado puso a disposición de dicha representación social en calidad de detenido al señor N1, detención que se efectuó a las 03:10 horas de la fecha señalada y que fue el día 4 de febrero cuando el detenido de referencia fue valorado por Médicos Legistas de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, quienes concluyeron que la lesión que presentó el indiciado de referencia no ponía en peligro la vida, tardaba hasta quince días en sanar, dejaba un vestigio en su superficie corporal y no dejaba consecuencias.

A dicho informe se agregó la declaración del indiciado de fecha 3 de febrero de 2011, que precisa que la comparecencia obedeció a un requerimiento previo.

10. Oficio número CEDH/V/CUL/001672 de fecha 22 de agosto de 2011, por el cual se hizo del conocimiento del señor N1 lo informado por la autoridad señalada como responsable, solicitándole expresara a este organismo lo que a su derecho conviniera, en el entendido que debería aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar las afirmaciones de la autoridad y en su caso sustentar las suyas.

11. Acta circunstanciada de fecha 30 de agosto de 2011, en la que consta que el señor N1 se comunicó vía telefónica a esta Comisión a efecto de solicitar se le ampliara el término para aportar pruebas a la investigación que nos ocupa.

12. El 12 de septiembre de 2011, personal de este organismo se constituyó en las instalaciones del CECJUDE Culiacán a efecto de preguntarle al inculpado N1 si ya contaba con la documentación que aportaría a la presente investigación, refiriendo que aún no la tenía, que no la había completado.

13. Con fecha 2 de octubre siguiente, se hizo constar que personal de esta CEDH recibió llamada telefónica del señor N1 para informar que ya contaba con las probanzas que aportaría a la presente investigación.

14. En fecha 28 de octubre de 2011, se constituyó personal de esta CEDH en el CECJUDE Culiacán, donde se entrevistó al inculpado N1 quien manifestó, según se advierte en acta circunstancia levantada con esa misma fecha, documento consistente en informe policial número 001115 de fecha 3 de febrero de 2011, signado por integrantes del grupo ****, adscritos a la sección de robo bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de policía Ministerial del Estado, así como comparecencia por separado de las personas que suscriben dicho informe.

En el informe policial de referencia se destacó lo siguiente:

“...los suscritos nos constituimos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, lugar donde siendo las 17:20 horas aproximadamente observamos en la parada de camiones que se encuentra frente al centro de referencia, a una persona que coincidía con la media filiación de N1, el cual procedimos abordar a la vez que nos identificábamos como agentes investigadores de esta Dirección, a quien le preguntamos por sus generales, manifestándonos responder al nombre N1 de ** años de edad quien tiene su domicilio ubicado por calle **** número ****, de la colonia **** de esta ciudad, y en relación a los hechos que se investigan reconoció que él llevó a cabo dichos hechos..., continúa manifestando que está dispuesto acompañarnos de manera voluntaria ante el representante social que lo requiera.....”

15. A través de oficio número CEDH/V/CUL/002636 de fecha 2 de diciembre de 2011, se le solicitó a la Agente Séptima del Ministerio Público del fuero común informara si existió por parte de esa representación social requerimiento alguno para el inculpado N1.

16. El 12 de diciembre siguiente, mediante oficio número 0087, dicha servidora pública rindió el informe solicitado, expresando que “el directo quejoso N1 efectivamente compareció previo requerimiento a rendir su declaración ministerial, pues así lo expresó y asentó en dicha diligencia el licenciado N4, agente auxiliar adscrito a la Agencia Séptima del Ministerio Público del fuero común de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa”.

Manifestando también en dicho informe, que “de las constancias en que se contrae la averiguación previa a la que se ha venido refiriendo en líneas anteriores, no se advierte constancia o documento en el que se motive y fundamente la figura del requerimiento que alude el precitado agente social.”

A dicho informe adjuntó copia de informe policial folio número 001115 fechado el 3 de febrero de 2011, signado por los integrantes del grupo **** adscritos a la sección de Robo Bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, así como orden de investigación de fecha 18 de enero de 2011, girada por el Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común de Culiacán.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Con fecha 3 de febrero de 2011, el hoy quejoso N1 al encontrarse en las afueras de las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, fue interceptado por elementos de la Policía Ministerial del Estado al considerársele probable responsable de los hechos delictuosos ocurridos el día 18 de enero de 2011,

constitutivos del delito de robo bancario cometido contra el patrimonio de la institución bancaria denominada Banco ****.

Los elementos policiales de nombre N2 y N3, encargado e integrante respectivamente del Grupo **** adscritos a la sección de robo bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, amparados en una solicitud de investigación que el Ministerio Público realizó, llevaron a cabo sobre el hoy agraviado actos de molestia al trasladarlo ante el Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad, sin que existiese por parte de éste la voluntad de acompañarlos.

Ante dicho representante social el hoy agraviado rindió su declaración, misma que fue recepcionada por el licenciado N4, agente auxiliar adscrito a la Agencia Séptima del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, el día 3 de febrero de 2011, a las 21:10 horas, quien asentó en diligencia correspondiente que la presencia de dicha persona era “previo requerimiento”, tal y como se advierte de la copia fotostática que fue allegada a la investigación que nos ocupa.

No obstante lo anterior, de la investigación llevada a cabo por esta CEDH se determinó que no existía tal requerimiento previo en contra del señor N1.

IV. OBSERVACIONES

En primer término es preciso destacar que los motivos de queja expresados por quien se dice agraviado N1 consistieron en la detención arbitraria de la que fue objeto, así como actos de tortura en su contra, los cuales según manifestó se suscitaron el día 3 de febrero de 2011 al ser interceptado en las afueras de las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad y trasladado a un lugar que no logró identificar.

Respecto la tortura que dice haber sufrido, cabe decir que ésta no fue posible acreditar dentro de la investigación que nos ocupa, dado que no existe una correspondencia entre las evidencias mostradas en su superficie corporal y la forma como refirió se llevaron a cabo los hechos, así como tampoco respecto del tiempo que aduce se le mantuvo privado de la libertad, dado que, de las diligencias agregadas a la investigación que nos ocupa se advierte la justificación del mismo hasta su presentación ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Dejando de lado lo anterior, es preciso resaltar, que la materia de análisis en la presente resolución serán los aspectos que a continuación se desglosan:

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Omitir hacer constar por escrito el acto de molestia

El derecho a la legalidad es un derecho en aras a la justicia, a que no haya lugar para actos discrecionales de las personas que trabajan para el Estado. Este derecho debe ser cumplido sin interpretación alguna que abra la puerta a situaciones que puedan vulnerar de cualquier forma algún otro derecho de cualquier individuo, pensando siempre en dar la mayor protección a la persona¹.

Es importante mencionar que el derecho a la legalidad entendido como derecho humano guarda diferencia con el derecho a la legalidad en general, dado que las notas características del ámbito en que pueda producirse es en la administración pública, la administración de justicia y la procuración de justicia, así como el hecho de que la inobservancia de la ley efectivamente traiga aparejado como consecuencia un perjuicio para el titular del derecho.

Partiendo de esta premisa y del análisis lógico jurídico llevado a cabo sobre el conjunto de evidencias que integran el expediente que nos ocupa, al cual corresponde el número CEDH/III/048/2011, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos muestra la violación a derechos humanos de los que ha sido víctima N1, como es a la legalidad, consistente, en la especie, en omitir hacer constar por escrito el acto de molestia.

Si bien el hoy quejoso en su escrito alude que su detención y traslado se llevó a cabo por los citados elementos policiales, quienes ejercieron sobre él actos de tortura y coacción para que se declarara culpable de un hecho delictivo que refirió no haber cometido, no quedó acreditado en la investigación que nos ocupa dado que no existió evidencia alguna que nos haga presumir la existencia de tales vulneraciones.

De las evidencias con que cuenta esta CEDH queda debidamente acreditado que el día 3 de febrero de 2011, siendo aproximadamente las 17:20 horas, los elementos policiales de nombre N2 y N3, encargado e integrante respectivamente del Grupo **** adscritos a la sección de robo bancario de la Coordinación de Investigación de delitos de policía Ministerial del Estado valiéndose de un oficio de investigación con folio número CLN/VII/175/2011, expedido por el licenciado N5, Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad, interceptaron al señor N1 cuando se encontraba en las afueras de las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad.

¹ Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, Coordinador, Editorial Porrúa, México.

Que una vez con dicha persona en su poder, lo trasladaron a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del fuero común, a cuyo cargo tenía la investigación radicada como averiguación previa número ****.

Sobre el particular es preciso resaltar el contenido del informe policial con folio número 001115 de fecha 3 de febrero de 2011, rendido por los citados elementos policiales, donde se expresó:

“Nos constituimos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, lugar donde siendo las 17:20 horas aproximadamente los suscritos observamos en la parada de camiones que se encuentra frente al centro de referencia, a una persona que coincidía con la media filiación de N1, el cual procedimos abordar, a la vez que nos identificábamos como Agentes investigadores de esta Dirección, a quien le preguntamos por sus generales.....continua manifestando que está dispuesto a acompañarnos de manera voluntaria ante el Representante Social que lo requiera...”

En dicho parte informativo se pretende hacer notar la voluntad de N1 para acompañarlos ante la autoridad que lo requiera; sin embargo, contrario a ello tenemos que el hoy agraviado en su queja niega rotundamente haber acompañado de manera voluntaria a los elementos policiales, sino por el contrario, éstos empleando la fuerza lo trasladaron a las instalaciones de la corporación policial y posterior a la elaboración del informe policial correspondiente, a la Agencia Séptima del Ministerio Público del fuero común, según se advierte de las constancias allegadas al expediente de investigación que nos ocupa.

Lo anterior queda acreditado con el contenido de la diligencia tomada ante el Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común el día 3 de febrero de 2011, en punto de las 21:10 horas y que consistió en declaración ministerial de N1, en la cual se asentó lo siguiente: “comparece ante esta Representación Social PREVIO REQUERIMIENTO”, toda vez que de existir por parte del declarante la voluntad para acudir ante dicha dependencia, indudablemente así debió haber quedado asentado en la diligencia que se llevó a cabo.

Lo anterior implica que el inculpado N1 en ningún momento expresó su voluntad para acudir ante el agente del Ministerio Público que tenía a cargo la investigación sobre el robo bancario, donde se le vinculaba como probable responsable, sino que dicha comparecencia se hizo mediante el uso de la fuerza pública, es decir, fueron los elementos policiales de nombre N2 y N3, integrantes del Grupo ****, quienes lo llevaron ante el Agente Séptimo del Ministerio Público para que rindiera su declaración ministerial respecto los hechos que consideraban había cometido.

Tal disposición la llevaron a cabo sobre el hoy agraviado, contraviniendo su voluntad y ejerciendo sobre él un acto de molestia que consistió en su traslado ante el citado servidor público que tenía a cargo la averiguación previa número ****.

Al respecto se transcribe lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Como se puede observar, dicho precepto legal supedita los actos de molestia de los servidores públicos a la estricta legalidad, exigiendo que el actuar de éstos emane no sólo de autoridad competente, cuya calidad se encuentra reunida al provenir tal acto del cargo de elementos policiales, sino además, también se hace exigible la existencia de mandamiento escrito que faculte dicho proceder y sin duda, se encuentre éste debidamente fundado y motivado.

Que en el caso que nos ocupa no se evidencia mandamiento alguno en contra del hoy agraviado, dado que no obra adjunto a las copias de actuaciones que nos fueron remitidas, cuya ausencia además fue corroborada por la Agente Séptima del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad, la licenciada N6, quien a través de oficio número 0087 refirió que de las constancias en que se contrae la averiguación previa número **** no se advierte constancia o documento alguno en el que se motive y fundamente la figura del requerimiento que alude el servidor público que recepcionó declaración al ahora quejoso.

Ante ello cabe destacar que, para que la autoridad lleve a cabo un acto de la naturaleza que nos ocupa y que además pueda considerarse que satisface el principio de legalidad consagrado por el artículo constitucional invocado, deberán coexistir diversos elementos como es la existencia de mandamiento y que a su vez éste obre “por escrito”, lo que implica que deberá quedar plasmado en un documento, mismo que también contendrá la firma original o autógrafa del funcionario que lo expida.

Ello tiene como finalidad brindar certeza sobre la existencia del acto de autoridad a fin de que el afectado tenga pleno conocimiento de la autoridad de que proviene, así como su contenido y consecuencias.

Sin pretender incurrir en excesos pudiéramos decir que además de la exigencia de que el mandamiento sea por escrito, éste deberá contener la

fundamentación y motivación correspondiente, lo cual se traduce en deber de la autoridad expresar los textos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, pues no bastará la existencia de sobrados argumentos legales para proceder a la realización de actos de molestia sobre una persona, sino que éste deberá ser plasmado en el documento respectivo, mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las que la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.²

Los citados requisitos evidentemente no se adecuan al caso que nos ocupa, pues ni por error existió documento que facultara a los elementos policiales integrantes del Grupo **** adscritos a la Sección de Robo Bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, para llevar a cabo los actos que materializaron en contra del hoy agraviado y que consistieron en llevarlo consigo ejerciendo sobre él la fuerza pública que emana de una orden de presentación la cual, a su vez, implica una remisión a la autoridad requirente.

Dicha conducta se llevó a cabo sin antecedente legal que la justificara, pues el único documento existente hasta ese momento era la solicitud de investigación, lo que denota que por determinación propia los elementos policiales decidieron interceptar al hoy agraviado en las afueras del CECJUDE Culiacán y trasladarlo, según dijeron, “voluntariamente”, a las instalaciones de la Agencia Séptima del Ministerio Público del fuero común para que rindiera su declaración ministerial respecto los hechos delictivos por el que lo consideraban probable responsable.

De tal manera que el contenido del informe policial rendido el día 3 de febrero de 2011, con folio 001115, pretendía hacer creer que existía por parte del entrevistado la voluntad para acompañarlos ante el representante social que lo requiriera; sin embargo, dicho acompañamiento voluntario no se llevó a cabo por parte del hoy agraviado, pues de haberse dado tales circunstancias, así habría quedado asentado en su declaración ministerial rendida en esa misma fecha, como tampoco existiera motivación para la interposición de la queja ante este organismo.

En ese contexto el hoy agraviado argumenta en su escrito de queja que al encontrarse en las afueras del CECJUDE en esta ciudad fue sometido por dos

² Lo anterior ha sido considerado por los Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, materia común, Tesis I.3º.C.52K, cuya denominación “ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.”

personas del sexo masculino quienes le colocaron esposas y lo trasladaron en un vehículo.

Dicho traslado no deja lugar a dudas que se debió a una presentación del señor N1 ante el Agente del Ministerio Público del fuero común que integraba la investigación, no obstante que éste en ningún momento requirió su presencia sino únicamente había girado a los citados elementos, el oficio de investigación correspondiente a efecto de que se avocaran a la investigación, más no que llevaran a cabo actos que a su juicio considerasen necesarios para allegar de elementos a la investigación, como fue la presentación del señor N1.

De las constancias aportadas por el propio agraviado al expediente que nos ocupa, se advierte comparecencia de los elementos policiales N3 y N2, de fecha 3 de febrero de 2011, donde ratifican el contenido del informe policial foliado con el número 001115, que fuera recepcionada previamente a la declaración tomada a N1, en la que quedó asentado que dicha persona acudía a rendir su declaración "PREVIO REQUERIMIENTO".

Al considerar que los elementos oficiales integrantes del Grupo **** llevaban a cabo una conducta investigadora respecto de un hecho delictuoso, no podemos perder de vista que la atribución de investigar los delitos compete única y exclusivamente al agente del Ministerio Público, quien tendrá a su cargo auxiliares que colaborarán con ésta.

En ese contexto, de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, se establece:

"Son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia y estarán obligados a cumplir las órdenes que dicten dentro de sus facultades legales, las autoridades y funcionarios competentes:

I. Los Presidentes Municipales;

II. El Director de la Policía Ministerial del Estado y personal bajo su dependencia;"

.....

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, en su artículo 16 establece que son auxiliares directos del Ministerio Público entre otros la Policía Ministerial del Estado.

Es evidente la preeminencia del quehacer competencial de la Policía Ministerial del Estado como auxiliar bajo el mando directo del Ministerio Público, con ello

se patentiza el imperativo de que el desempeño funcional de la Policía Ministerial se lleve a cabo conforme a muy precisos lineamientos.

La Policía Ministerial del Estado en todo momento de su actuación debe responder a precisadas previsiones, que con efectividad y suficiencia limiten y excluyan la discrecionalidad y el actuar reactivo meramente espontáneo del cuerpo policial, de forma tal que para toda situación surgida en la realidad del desempeño cotidiano, los integrantes de la corporación tengan dispuesto el correcto modo actuacional y la serie de acciones, aptas e idóneas, para afrontarla según se presenta.

Lo anterior no es otra cosa que un estricto respeto a la legalidad, al cual se encontraban obligados los elementos policiales de nombre N2 y N3, en su carácter de servidores públicos.

Y con tal obligatoriedad los elementos de referencia debieron llevar a cabo estrictamente las indicaciones dadas por el agente del Ministerio Público a cuyo cargo se tenía la investigación de la averiguación previa número ****.

Por lo que no existió acto permisivo para que éstos llevaran a cabo conducta distinta a la expresada mediante oficio correspondiente, la cual se limitaba única y exclusivamente a investigación de hechos y no a una localización y presentación de la persona que consideraban como probable responsable.

Así también es preciso destacar que atendiendo al Instructivo para la Realización de las Funciones Específicas de la Policía Ministerial, en su artículo 7 define como:

“g) Oficio de expedición.- Es el documento debidamente foliado y fechado a través del cual el Ministerio Público con apego a sus atribuciones legales emite la orden de investigación, de detención o de presentación, según sea el caso, para su debido seguimiento y cumplimentación;”

Como podrá advertirse claramente, el citado documento no sólo exige que las órdenes correspondientes sean giradas por la autoridad responsable, como lo es el agente del Ministerio Público con estricto respeto a sus atribuciones legales, sino que además se encuentre por escrito.

Exigencias que todo acto de autoridad requiere, particularmente si nos referimos a una orden de presentación, a efectos de que éste no sea considerado como un verdadero acto de molestia.

Para mayor orientación al respecto cito la siguiente Tesis:

“ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EJERCICIO DE SU FACULTAD INVESTIGADORA. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA QUE DEBE RESPETAR LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.-

La orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público en ejercicio de la facultad investigadora prevista por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto de molestia para el gobernado que restringe de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos y es legal siempre y cuando preceda mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Por tanto, si dicho acto de molestia no contiene los preceptos legales en que se funda, ni las razones o circunstancias que sustenten la causa legal del procedimiento, así como la adecuación entre los fundamentos aplicables y los motivos aducidos, a fin de que su destinatario cuente con los elementos para defenderse del mismo, debe declararse inconstitucional por contrariar la garantía de legalidad que preserva el artículo 16 de la Carta Magna.

Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Amparo en revisión 748/2002.-27 de junio de 2002.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Baraibar Constantino.- Secretaria: Blanca Isabel González Medrano.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1415, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.8°.P.4P

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo II, Penal, P.R. TCC. Tesis 188. Página: 277, Registro 921677 Tesis Aislada. Materia: Penal”

Con todo lo anterior se advierte que el panorama mostrado con el actuar de los citados servidores públicos no corresponde al mostrado jurídicamente, pues los elementos policiales en un supuesto ejercicio de sus funciones ejercieron atribuciones que no les correspondían, como fue determinar sobre la presentación de quien hoy se dice agraviado sin que existiese mandamiento alguno que justificara su proceder, lo cual no sólo se tradujo en un acto de molestia, sino además queda plenamente acreditada la detención arbitraria de la que hicieron objeto a dicha persona.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la libertad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Detención arbitraria

El derecho a la libertad personal es que el mismo debe estar exento de cualquier limitación arbitraria, que no pueda ser coartado más que por lo estrictamente establecido; lo que implica que ninguna persona en nuestro país puede ser privado de su libertad personal, sino solamente en los supuestos previstos por el ordenamiento legal y mediante la observación de las formalidades previstas en la ley.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración los razonamientos expuestos en el capítulo de derecho a la legalidad que antecede, efectivamente se realizó un traslado de la persona de nombre N1 ante el Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad.

Con motivo de dicho traslado, los citados elementos policiales elaboraron parte informativo con folio número 001115 en el que expresaron al citado servidor público que el hoy agraviado decidió acompañarlos por su propia voluntad.

Al partir de la voluntariedad que aducen los elementos policiales mostró el hoy agraviado, pudiera considerarse la inexistencia de una transgresión al derecho a la libertad personal del mismo; sin embargo, del propio dicho de éste se advierte la ausencia de voluntad del mismo, sino por el contrario, una vez interceptada dicha persona en las afueras del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad, fue sometido por los elementos policiales quienes le colocaron esposas para luego trasladarlo a las instalaciones de la Policía Ministerial y posteriormente a la citada agencia social.

En ese contexto es preciso destacar que el derecho a la libertad personal ampara la libertad física o corporal de las personas, protege el derecho de éstas a no ser obligadas a permanecer en lugar determinado y a su vez tutela la independencia de abandonar el lugar donde se encuentre, marchándose si así lo desea sin solicitar siquiera autorización de persona alguna.

Circunstancia que por ningún motivo ocurrió en el caso que nos ocupa, pues no se le permitió por parte de los elementos policiales al hoy agraviado decidir si los acompañaba o no y mucho menos retirarse de las instalaciones en las que en algún momento se encontró como fue la Policía Ministerial del Estado y la Agencia Séptima del Ministerio Público del fuero común, sino por el contrario durante el tiempo que lo tuvieron bajo su poder se le privó a éste de tomar cualquier tipo de determinación sometiéndolo únicamente a sus decisiones.

Ello se corrobora en las lesiones que presenta el quejoso en su rostro, mismas que fueron certificadas por perito adscrito a la Dirección de la Policía Ministerial

del Estado, con posterioridad a su detención, puesto que de haberlos querido acompañar voluntariamente, las lesiones no se hubieran presentado.

Lo anterior se ve también reflejado en las actuaciones que integran el expediente que nos ocupa, particularmente del escrito de queja presentado por el hoy agraviado donde niega rotundamente haber acompañado voluntariamente a los elementos policiales que efectuaron su detención, lo cual viene a corroborarse con la propia comparecencia del hoy inculcado ante el Agente Séptimo del Ministerio Público de esta ciudad, quien descartó la posibilidad de que dicha persona hubiese acudido de manera voluntaria y por su parte asentó que la comparecencia era previo requerimiento.

Con la citación de dicho término “previo requerimiento” se infiere que éste lleva implícito la preexistencia de un mandamiento, que hipotéticamente pudiera ser orden de presentación, la cual en razonamientos anteriores quedó acreditada su inexistencia, en su caso orden de aprehensión o también orden de detención.

Fuera del supuesto legal de flagrancia delictiva, la cual de la narrativa de los hechos delictivos investigados a todas luces se advierte su inexistencia, es con los mandamientos legales referidos con los que la autoridad legalmente podrá justificarse la perturbación de la libertad personal del hoy agraviado; sin embargo, al no encontrarse acreditado alguno de ellos, la conducta de traslado llevada a cabo por los agentes integrantes del Grupo **** adscritos a la sección de robo bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de la Policía Ministerial del Estado, el día 3 de febrero de 2011 en las afueras de las instalaciones del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en esta ciudad se traduce en privación de la libertad pues no es posible etiquetarle con una nomenclatura distinta, sino por el contrario nos encontramos ante la presencia de una detención arbitraria al carecer tal conducta de los requisitos legalmente establecidos.

Lo anterior nos lleva a considerar que los elementos policiales transgredieron el derecho a la libertad personal del hoy agraviado, haciéndolo objeto de una detención arbitraria que prohíbe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido por el artículo 16, que al respecto cita:

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

El citado ordenamiento sin lugar a dudas fue pasado por alto por los servidores públicos de referencia, al omitir proteger los derechos del hoy agraviado

evidenciando una transgresión al derecho a la libertad personal, la cual se vio materializada desde el momento mismo en que fue colocado bajo su dominio total y sometido con esposas, subiéndolo a través de la fuerza al vehículo que éstos traían, tal y como lo expresó el propio quejoso en su escrito de reclamación y se corroboró con la comparecencia de éste ante el Agente Séptimo del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, a efectos de que rindiera su declaración como indiciado respecto los hechos delictuosos que se le venían atribuyendo en la averiguación previa número ****.

Es preciso destacar que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar la seguridad de los individuos y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues le asiste el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conforme a legalidad y respetuosos de los derechos fundamentales de todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción, lo cual evidentemente no aconteció en el caso que nos ocupa, desde el momento mismo en que se está privando de la libertad al hoy agraviado sin que existieran siquiera los elementos que legalmente se exigen para justificar una detención.

Partiendo de los razonamientos vertidos, los citados servidores públicos pasaron por alto lo dispuesto en el precepto constitucional número 16, que se refiere a la prohibición de actos de molestia y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la autoridad sin la existencia del mandamiento correspondiente de la autoridad competente.

Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que todo servidor público sólo puede hacer lo que la ley les permite sin dejar a su libre albedrío el actuar de éstos, como sucedió en el caso que nos ocupa, donde la autoridad atendiendo una falsa concepción de la realidad jurídica llevó a cabo actos que transgredieron los derechos humanos del hoy agraviado.

En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la seguridad debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física”³ y que “con la protección de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal”⁴.

³ Caso Chaparro Álvarez y Iapo Iñiguez vs Ecuador, *supra* nota 99, párr. 53.

⁴ Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, Párrafo 80; Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005.

Pronunciamiento que encuentra su fundamento en la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**, la cual en su artículo 7.2 que se refiere a la libertad personal, y contempla lo siguiente:

“2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”

Lo que implica que sin importar la denominación o calificación que los propios servidores públicos asignen a la conducta que llevan a cabo, como es el caso que nos ocupa, cualquier conducta que prive de la libertad personal al individuo, se encuentra prohibida no sólo por legislaciones locales y nacionales sino también internacionales, como son en cuanto a estos últimos:

Declaración Universal de Derechos Humanos en cuyo artículo 3° refiere:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho de protección contra la detención arbitraria, en cuyos artículos establece:

“Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

Artículo XXXIII. Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre.”

Al retomar el contenido del último de estos artículos, en el que como podrá advertirse, hace exigible a todo ciudadano el cumplimiento de las leyes, ni qué decir de la obligatoriedad para los servidores públicos cuyo actuar se encuentra estrictamente supeditado al texto de las mismas.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa:

“Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en sus artículos refiere:

Artículo 1o.

“...los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”,

Artículo 2º.

...En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.”

En mérito de lo referido, este organismo defensor de los derechos humanos realiza juicio de reproche a los elementos policiales de referencia en virtud de que tal conducta fue llevada a cabo atendiendo su calidad de servidores públicos, entendiéndose como tal, según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo. 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.”

Numerales de los que claramente se desprende que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

En similares términos la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su artículo 2º establece:

“Artículo 2o. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los tres poderes del Estado, así como en los organismos e instituciones de la administración pública para estatal cualquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura o denominación de éstos y quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos u organismos e instituciones municipales.”

Con lo anterior, no hay duda que los señalados como responsables de violaciones a derechos humanos tienen y tenían en la fecha de suscitados los actos que se les reprochan, el carácter de servidores públicos en el Gobierno estatal, por lo que les asistía la obligación de guiar su conducta con estricto apego a la legalidad, lo cual no hicieron, transgrediendo así tanto legislación nacional y local invocadas en el apartado que nos ocupa.

Derivado del análisis lógico-jurídico practicado al conjunto de evidencias que obran en el expediente que nos ocupa, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos corrobora la existencia de violaciones al derecho a la legalidad y a la libertad personal, como es la falta de fundamentación o motivación legal para llevar a cabo cualquier acto de molestia, así como también la existencia de mandamiento, en su caso, flagrancia delictiva que otorgara al servidor público actuante la permisión para interrumpir la libertad personal del hoy agraviado

Por ello las conductas atribuidas a los servidores públicos de referencia pueden ser constitutivas además de responsabilidad por violaciones a derechos humanos, de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis

segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, C. Procurador General de Justicia del Estado, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al órgano de control interno de esa Procuraduría de su cargo para que al considerar los actos motivo de la queja, así como los razonamientos expuestos por esta Comisión, se giren instrucciones para que se inicie el procedimiento administrativo en contra de los elementos policiales N2 y N3, encargado e integrante, respectivamente, del Grupo **** adscritos a la Sección de Robo Bancario de la Coordinación de Investigación de Delitos de Policía Ministerial del Estado, en la fecha en que se suscitaron los hechos.

SEGUNDA. Se gire instrucción al citado grupo policial así como al resto de los elementos de la corporación policial a efecto de que se evite incurrir en repeticiones respecto los hechos que motivaron la presente resolución y realicen su actuar con estricto apego a legalidad y bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos de toda persona en el Estado de Sinaloa.

TERCERO. Se giren instrucciones debidas a efecto de que elementos policiales de esa Procuraduría reciban la capacitación necesaria y adecuada en materia de derechos humanos y legalidad.

La presente recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia en el Estado, la presente Recomendación, la cual quedó registrada en los archivos de esta Comisión bajo el número 14/2012, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días

hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo motive, fundamente y haga pública debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución tanto la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

Se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Por otro lado, y en caso de aceptación de la presente Recomendación, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia.

Notifíquese al señor N1, en su calidad de quejoso, la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO